CHILE: MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA*

Por Clodomiro Almeida

Intentar a los 15 años de la victoria de Salvador Allende en las elecciones presidenciales chilenas de 1970, hacer una profunda y exhaustiva reflexión al respecto, insertándola en la trama de todo lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora en nuestra Patria y que no es sino la secuela de ese significativo evento —gobierno popular, golpe de estado, dictadura militar, derrumbe del modelo económico por ella prohijado y ascenso progresivo del movimiento popular opositor—, intentar agotar ese tema, repito, es tarea imposible de acometer con las limitaciones que imponen las circunstancias de un encuentro como este.

Por eso me limitaré, en una sumaria exposición, a reflexionar sobre algunos aspectos del triunfo de la Unidad Popular y de Salvador Allende en 1970 y sus consecuencias, que a mi juicio alcanzan especial relevancia por las lecciones que arrojan. Lecciones que en este momento de agonía de la dictadura militar, adquieren especial relieve y que deben ser recogidas por las fuerzas democráticas chilenas hoy, para que al reemprender nuestro pueblo mañana, la tarea iniciada por Salvador Allende e interrumpida por el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, esas lecciones sean tenidas severamente en cuenta e impidan que la empresa de querer construir en nuestro Chile una nueva y más justa sociedad, se vea otra vez frustrada, ocasionando similares sufrimientos y miserias a los que ha padecido la inmensa mayoría de los chilenos desde el momento en que Salvador Allende ofreciera su vida en aras del compromiso histórico que había contraído con el pueblo de Chile, al hacerlo éste portador de sus ideales y esperanzas.

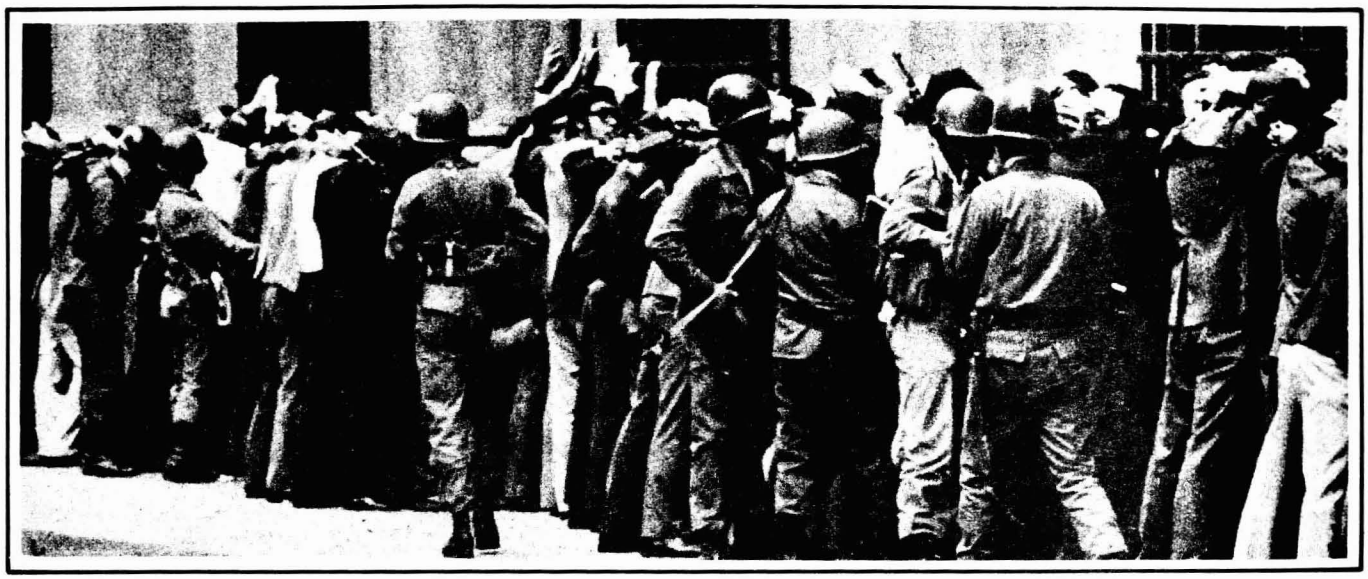
* Ponencia presentada en el ciclo de conferencias *Chile, más allá de la memoria*, organizado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM, y la Casa de Chile.

Socialismo por la vía democrática electoral

El 4 de septiembre de 1985 se cumplen 15 años desde que un hecho insólito ocurrido en Chile sorprendiera a la opinión pública mundial. Por primera vez en la historia de las democracias occidentales, en una elección general, triunfaba una postura sostenida por una alianza política de partidos que no ocultaban su carácter revolucionario, no obstante que su programa de gobierno era sólo el de una democracia radical que se proponía por vías constitucionales ir creando las condiciones para el progresivo avance hacia el socialismo. Se trataba, como lo proclamara Salvador Allende, como candidato primero y como Presidente después, de marchar hacia el socialismo en "democracia, pluralismo y libertad".

El hecho era insólito, porque en esa victoria electoral concurrían dos circunstancias que nunca se habían dado antes simultáneamente. La primera, la de que la coalición política triunfante fuera hegemonizada por partidos revolucionarios, y la segunda, la de que el acceso al socialismo se planteaba no por la vía de la revolución armada o por la toma insurreccional del poder, sino por la vía democrática electoral.

Pero la victoria de Salvador Allende con esos caracteres era sólo aparentemente sorpresiva o inesperada. Podía serlo quizás mirada desde afuera, pero en términos de la propia



historia de Chile el hecho era explicable, y se puede decir, hasta natural y necesario.

El triunfo de Allende y la Unidad Popular resultaba como un fruto maduro de un largo proceso de desarrollo de la vida política y de las instituciones republicanas chilenas, las que, a diferencia de la mayor parte, por no decir de la totalidad de las democracias formales latinoamericanas, se habían mostrado capaces y flexibles para ir modificándose en un sentido cada vez más democrático, tanto en cuanto a una creciente participación popular en el poder, como en cuanto a una mayor participación también del pueblo en la repartición del producto del desarrollo económico, procesos ambos interrelacionados, que se intensificaron especialmente durante y de resultas del esfuerzo nacional para salir de la crisis económica producida en el país como reflejo de la gran depresión mundial de comienzos de los años 30.

Los moldes tradicionales de la democracia chilena

El año 1920, el ascenso a la presidencia de Aturo Alessandri marcó el inicio de la coparticipación de las clases medias, junto a la oligarquía en la administración del poder, proceso que en otra forma continuó también durante el gobierno de su implacable adversario, el presidente Ibáñez. Luego después de la segunda administración Alessandri, durante la cual la oligarquía recobró su rol dominante, la victoria de Pedro Aguirre Cerda en brazos del Frente Popular —conformado por Radicales, Socialistas y Comunistas hegemonizados por los primeros—, señaló un nuevo avance de las fuerzas populares siendo la oligarquía desplazada del control político, aunque continuó dominando en la economía, pero ahora compartiendo allí su presencia con la de un área de propiedad pública en sostenido crecimiento. Durante las presidencias radicales inauguradas por Aguirre Cerda, su etapa progresista no fue interrumpida por golpes militares como ocurrió en Argentina en septiembre de 1930. Y su fase conservadora final no logró revertir la orientación general hacia la profundización de la democracia de nuestro decurso histórico, como lo demostró la irrupción populista del ibañismo en 1952, que luego de su frustración creó las condiciones para la recomposición de la izquierda, centrada ahora en el entendimiento socialista-comunista. Esta izquierda así rearticulada estuvo a punto de alcanzar la victoria en las presidenciales de 1958 y si no se logró después, en las de 1964, fue porque entonces, la derecha atemorizada se colocó detrás de la candidatura centrista de Eduardo Frei la que por su lado recogió buena parte del electorado popular penetrando en la clase obrera y sobre todo, en el campesinado.

Resulta así, que no aparece extraño ni insólito que la izquierda nucleada tras Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970 alcanzara la primera mayoría electoral, máxime si sus adversarios se presentaron divididos. Y lo que es importante señalar, parte considerable del electorado que favoreció entonces la postulación democristiana de Radomiro Tomic, respondía también a posiciones de avanzada, por lo que se puede decir, que en términos de orientación política, el 4 de septiembre de 1970, la gran mayoría de los chilenos se pronunció por los cambios y por proseguir profundizando las transformaciones sociales dentro de la democracia, ya que la política reformista había tocado fondo en la segunda parte de la administración Frei y sólo cabía el retorno a la derecha o continuar avanzando hacia la izquierda, hacia el socialismo.

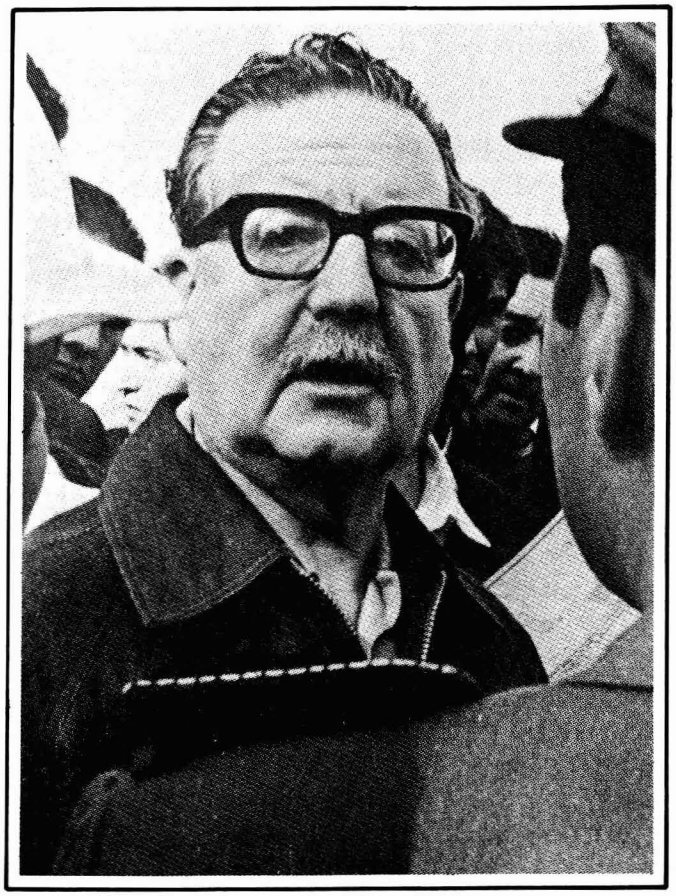
El triunfo de Allende en las urnas se veía además garantizado y respaldado por la fortaleza aparente de un sistema político, de una institucionalidad, que había logrado encauzar y procesar hasta entonces sin mayores trastornos, las sucesivas demandas de la clase trabajadora que reflejaban el ascenso y desarrollo del movimiento popular y de sus organizaciones sociales y políticas. Indicador de esta fortaleza de la institucionalidad republicana lo era principalmente, la prescindencia política de unas Fuerzas Armadas de carácter profesional, que avalaban sin deliberar el resultado de las contiendas cívicas y electorales.

Pese a estas razones que explican el porqué del triunfo del 4 de septiembre de 1970 y hacían posible abrigar fundadas esperanzas que la empresa política que se iniciaba pudiera acometerse y realizarse dentro de los moldes tradicionales de la democracia chilena, tres años después, el 11 de septiembre de 1973 un golpe militar reaccionario, estimulado y sostenido por las fuerzas conservadoras del país y con el apoyo del imperialismo norteamericano, logró interrumpir el proceso iniciado con el ascenso de Salvador Allende al gobierno, proceso que había logrado en el transcurso de tres años realizar importantes transformaciones sociales en el país que no es del caso resumir ni recordar ahora.

Elementos de análisis

¿Qué factores esenciales hicieron posible que aquel proyecto político liberador se frustrara y lo que parecía viable no pudiera convertirse plenamente en realidad, consolidarse y culminar sus objetivos?

Muchas causas podrían señalarse para explicar la interrupción por la violencia militar de la experiencia de la Unidad Popular. Nos limitaremos ahora a considerar solo tres elementos que incidieron en el transcurso del Gobierno de Salvador Allende y que condicionaron su derrota frente a la contrarrevolución, y que no siendo los únicos ni mucho menos, tienen, como dejamos dicho, especial significación en esta hora, en que las enseñanzas del pasado pueden y deben enriquecer el patrimonio político del pueblo chileno y permitirle luego, caída la dictadura, reemprender con éxito el camino de su emancipación. Dejamos de lado pues, voluntariamente, la consideración de algunos aspectos de la política económica e internacional que concurrieron también a condicionar el desenlace final de proceso.



El primer elemento que queremos realzar tiene que ver con el hecho de no haberse logrado durante el Gobierno Popular reunir tras él todo el apoyo social y político posible y necesario para poder llevar adelante el ambicioso proyecto de transitar por la democracia hacia el socialismo.

En efecto, la mayoría progresista del país, producto natural del desarrollo de la democracia chilena, al fraccionarse en las elecciones de 1970 en una parte mayoritaria que acompañó a Salvador Allende y en una porción no despreciable que manifestó su intención de continuar avanzando hacia la izquierda siguiendo a Radomiro Tomic, determinó que el triunfo electoral de Allende correspondiera a una votación de sólo poco más de un tercio del electorado no alcanzando a comprometer el 40% de los sufragios.

Tal importante circunstancia —negativa en cuanto restaba legitimidad al gobierno de la Unidad Popular, no a su legalidad constitucional que era inobjetable— pudo haberse corregido si el nuevo gobierno hubiera expresado al conjunto de las fuerzas progresistas, a las que votaron por Allende y a las que sufragaron por Tomic. En esa forma hubiera aumentado considerablemente la legitimidad y la fuerza del gobierno popular y se hubiera viabilizado más el proyecto democrático avanzado que ambas candidaturas, la de Allende y Tomic, sustentaban.

Eso habría permitido una mayor capacidad de atracción de las capas medias hacia el proyecto transformador, haciendo menos susceptible de identificar la imagen del nuevo gobierno con la del extremismo de izquierda, que estaba muy lejos de representar, pero a lo cual era altamente vulnerable por aparecer fundamentalmente apoyado en el eje socialista-comunista.

Pero el concierto entre la izquierda y el progresismo demócrata cristiano no se produjo. No por voluntad de Allende ni de Tomic. Ni de las propias bases populares de ambas postulaciones. Recuérdese que el día del triunfo de la Unidad Popular, sectores populares que apoyaban a Tomic recorrieron las calles expresando su satisfacción por la derrota de la derecha y que fue la expresión de esas bases la que determinó que los parlamentarios demócrata cristianos en el Congreso Nacional votaran por Allende, cuando ese Congreso hubo de elegir entre las dos candidaturas con las más altas mayorías relativas. A pesar de que la mayoría de esos parlamentarios demócrata cristianos hubieran preferido seguramente, pronunciarse por la candidatura Alessandri.

El peso de las fuerzas de conservación social

Para votar por Allende en el Congreso, hubo la Democracia Cristiana, presionada por sus sectores conservadores, de imponer entre otras, una condición fundamental al futuro gobierno: no tocar a las Fuerzas Armadas. Su instinto de clase llevó al ala conservadora de la Democracia Cristiana, interpretando con ello también a toda la derecha, a buscar una garantía para que el orden social, en su esencia, no fuera alterado por el nuevo régimen. Eso sólo se podía obtener manteniendo intactas a las Fuerzas Armadas tradicionales, cuya prescindencia política anterior no significaba que su cultura política profunda no fuera marcadamente conservadora. Por lo tanto, mientras esas Fuerzas Armadas continuaran siendo lo que eran, constituían una suficiente póliza de seguridad para el orden establecido, lo que la práctica corroboró trágicamente cuando los militares se sublevaron contra el régimen constitucional.

Ni Allende ni Tomic, se deja dicho, fueron obstáculos para que un gobierno de las mayorías nacionales pudiera haberse constituído con respaldo de la base popular de ambas postulaciones.

Pero sí fue obstáculo para ello el sectarismo latente en importantes sectores de la Unidad Popular, que como toda desviación "izquierdista" se caracterizó por una sobrestimación de la fuerza propia y una subvaloración de la del enemigo.

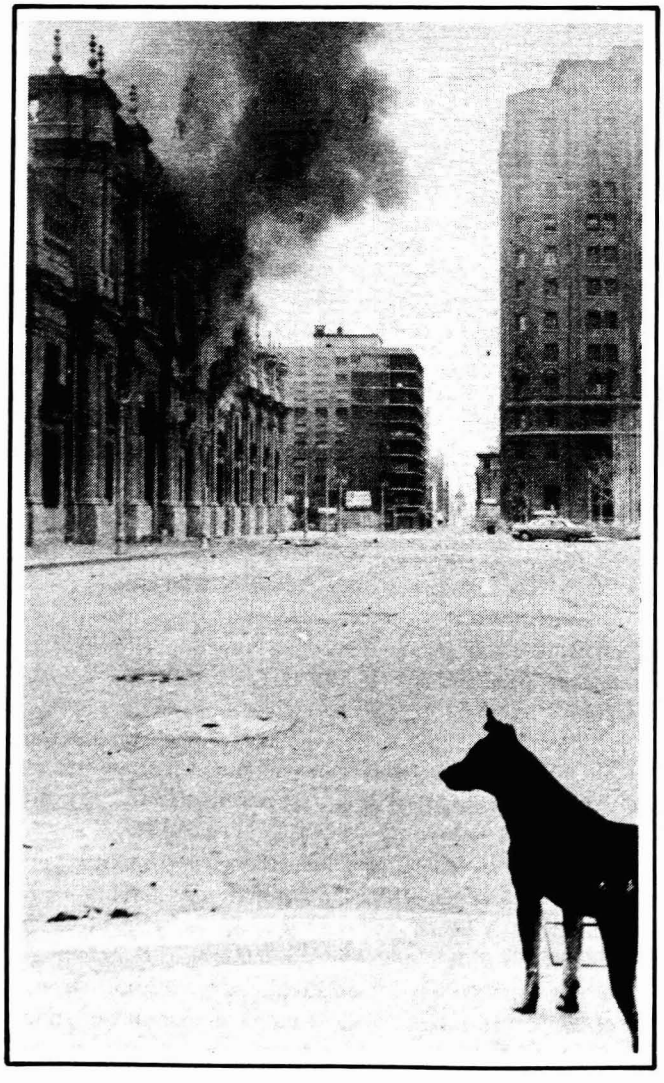
Pero por sobre todo, fue obstáculo para ese entendimiento, el conservadurismo de la derecha demócrata cristiana para la cual, a diferencia de su base social popular, su ene-

migo principal no era el injusto e irracional orden social vigente, sino el peligro de una verdadera revolución social que pudiera subvertirlo, y que ellos advertían como altamente probable con la puesta en marcha y desarrollo del programa de la Unidad Popular.

Las consecuencias de no haberse producido tras la victoria del 4 de septiembre una ruptura del esquema tripartito de la estructura partidista del espacio político chileno —derecha, centro e izquierda—, fueron inmensas y decisivas para el futuro del nuevo gobierno.

No porque la democracia cristiana fuera en sí una fuerza política extraordinariamente representativa, sino porque al permanecer instalada en una posición de centro y arbitral, hizo posible que la derecha y la contrarrevolución en potencia se escondieran y camuflaran detrás de ella, ocultando su verdadera faz, presentándose como adalid de una democracia y de una libertad que nadie amenazaba y en la que no creían. Dispuso así la derecha a través de la democracia cristiana, de un idóneo instrumento político y social para atraer hacia sí a las capas medias, vacilantes en su esencia y sobre todo anhelosas de seguridad para su futuro, valor que se empeñó en presentar comprometido y cuestionado por el gobierno y el programa de la Unidad Popular.

Resulta pues, que habiendo existido condiciones en 1970 para que se constituyera un gobierno democrático avanzado con proyección revolucionaria, respaldado por una vasta mayoría nacional, la división del campo popular y la manutención autónoma de un centro político en posición arbitral, determinó desde sus inicios, que la nueva administración se sustentara en una base social y política de menor amplitud que la posible y de la que se requería para poder llevar a cabo un programa, que si bien no era maximalista, era lo suficientemente avanzado como para generar profundas resistencias en las fuerzas de conservación social, cuyo peso en el país era mucho mayor de lo que se mostraba en la superficie.



El descompromiso de la Democracia Cristiana, del centro político y de las capas medias, con el gobierno popular, se fue trocando progresivamente en oposición cada vez más acentuada, y los ingredientes conservadores en su interior fueron ganando paulatinamente posiciones y adquiriendo mayor fuerza. Fenómeno éste que fue favorecido por el hecho de que en dos ámbitos sociales muy sensibles y decisivos, el sindical y el de la burocracia, el competidor con el que se encontraba la izquierda no era la derecha, sino la Democracia Cristiana, lo que determinó que en ambos ámbitos, el enemigo principal percibido por los partidarios del gobierno no fueran quienes de verdad eran los adversarios de clase, sino la Democracia Cristiana y otras fuerzas centristas, instrumentadas por la reacción y a la cual le servían de escudo y de disfraz.

Manipulación de las capas medias

Todo lo anterior resultó particularmente grave, porque afectaba al comportamiento político de las capas medias cuyo peso social en Chile es determinante.

Y aquí corresponde añadir el segundo elemento que queremos destacar como condicionante de la debilidad del Gobierno Popular y del éxtio de la contrarrevolución.

El proceso de ajenitud primero, y de alejamiento después, de las clases medias del gobierno, fué facilitado y reforzado por el uso y manipuleo que la oposición hizo en su favor de los valores que más influyen en la conducta de esas capas sociales, haciéndoles creer que dichos valores se encontraban amenazados de muerte por la Unidad Popular y su gobierno. En ese intento la oposición tuvo éxito. No porque en realidad esos valores estuvieran efectivamente amenazados, sino porque, dado el control que la oposición tenía de buena parte de los medios de comunicación, formadores de opinión pública —diarios, revistas, radio y televisión—, le fue a ésta fácil presentar un cuadro de la situación nacional, caracterizado por el desorden, la inseguridad y la anarquía —lo que constituía una imagen caricaturesca de la realidad—, pero que llegó sin embargo a ser percibida por vastos sectores sociales como si fuera la verdad. A ello se añadió el empeño por caracterizar al gobierno de manera ideológica, como esencialmente marxista, pro comunista y pro soviético, buscando el reflejo espontáneo de rechazo que estos términos tienen en la cultura política de significativos sectores de capas medias, que los asocian mecánicamente, como efecto de una propaganda secular, a lo negativo, a lo malo y hasta a lo diabólico, sobre todo en el seno de sus sectores más inmaduros y despolitizados.

La libertad y la democracia se las hacía aparecer peligrosamente amenazadas por un gobierno, al que se calificaba majaderamente de marxista-leninista y al que se trataba de vincular con la idea de "dictadura del proletariado", con todo lo peyorativo que aquel término conlleva. Se dio así la paradoja que durante el gobierno chileno en el que más li-

bertad hubo y en el que mayor participación democrática existió, la imagen que se iba conformando de él en las capas medias era la de un gobierno dispuesto a sacrificar las libertades y derechos ciudadanos en aras de la instauración de una dictadura proletaria marxista, pro comunista y pro soviética. Muchos de los actuales opositores que hoy día son víctimas de la implacable violencia represiva, y cuyos derechos ciudadanos eran en ese entonces plenamente respetados, fueron movilizados paradojalmente a las manifestaciones callejeras opositoras al conjuro de la consigna "Chile es y será un país de libertad".

En este terreno de la lucha ideológica y de la propaganda, el Gobierno Popular se mantuvo a la defensiva. No logró diseñar y poner en práctica un contraataque en el campo de las ideas y de la publicidad, que contrarrestara exitosamente la campaña de desinformación y de deformación de la realidad que al costo de millones de dólares provenientes del extranjero llevaban a cabo las fuerzas reaccionarias. No se consiguió demostrar ni difundir eficazmente en la opinión pública que lo que la oposición reaccionaria quería defender, no era en verdad ni la libertad, ni la democracia, ni el orden, ni la seguridad, sino la injusticia, la irracionalidad, la explotación, consustanciales con el orden social imperante. En otras palabras, no se logró demostrar que eran los intereses de la gran propiedad, de los monopolios y del imperialismo lo que la oposición defendía y la razón última por la que atacaba al gobierno. No se logró por lo tanto, hacer conciencia de que los verdaderos enemigos de la democracia y la libertad eran los que aparecían como sus adalides, y que a sus reales defensores era a quienes se quería presentar como sus enemigos.

Las fuerzas armadas: un factor contrarrevolucionario decisivo.

De más está decir, por otra parte, que en la concepción de la democracia a la manera liberal burguesa, la libertad es un atributo de la propiedad, de modo que en el fondo, cuando las clases dominantes cuyo control del Estado se intentaba disputar, decían defender la libertad, lo que en realidad querían cautelar era la estructura de la propiedad, sobre la base de la cual, podían ejercer esas clases dominantes libertades y derechos de los que sólo nominal y muy parcialmente eran titulares la inmensa mayoría de los desposeídos.

A la insuficiente base social y política inicial del gobierno Popular para llevar a cabo su proyecto transformador, y a su incapacidad para enfrentar con éxito la ofensiva ideológica de las fuerzas conservadoras para ganarse a las capas medias, hay que agregar un tercer elemento concurrente a la carencia de fuerzas del gobierno de la Unidad Popular, que queremos especialmente enfatizar aquí, y que posibilitó el éxito del pronunciamiento contrarrevolucionario de las Fuerzas Armadas, elemento que por su trascendencia permanente y su incidencia en el presente y el futuro de Chile, es imposible dejar de relevar con fuerza.

Nos referimos al hecho de que la victoria electoral de Salvador Allende y el acceso de la Unidad Popular al Gobierno no significaron ni mucho menos la toma del poder real y efectivo en la sociedad. Esta circunstancia ha sido traducida en una frase que es de circulación corriente en los medios políticos: la izquierda de 1970 asumió el gobierno, pero no tomó el poder.

Ello no sólo ni principalmente, porque la economía en lo fundamental hubiera seguido enmarcada dentro de un contexto capitalista, ni porque ideológicamente la izquierda no hubiera logrado conquistar la hegemonía de la sociedad, sino fundamentalmente, porque las Fuerzas Armadas que ostentan el monopolio legítimo de la violencia, no fueron transformadas durante el Gobierno Popular y constituyeron un cuerpo extraño impermeable al proceso social y político que vivía el país, y continuaron ellas siendo tributarias de valores culturales y políticos del todo ajenos a dicho proceso y cargados con un contenido de clase, que las inspiró, motivó y las llevó a ser agentes materiales, del golpe de Estado y de la contrarrevolución que le siguió.

Señalábamos anteriormente que con agudo instinto de clase la derecha demócrata cristiana impuso como condición para su apoyo en el Congreso Nacional a la postulación de Salvador Allende, el que no se alterara el sistema de mando existente en las Fuerzas Armadas. Pero no fue esa la razón ni la causa fundamental de que el Gobierno Popular no se propusiera ni emprendiera realmente la transformación de aquellas. A eso contribuyó de modo determinante, la ausencia de una real internacionalización del concepto básico, de que el rol fundamental de las instituciones castrenses es el de ser órganos coercitivos destinados a sostener un orden socio-político determinado e igualmente la despreocupación por el análisis de la forma concreta de cómo las Fuerzas Armadas cumplían esa función en Chile, habida consideración de su propia historia y caracteres institucionales, en el contexto de la también concreta y específica sociedad chilena.

Esta carencia de un proyecto militar por parte del Gobier-

no Popular tuvo graves consecuencias que es ocioso remarcar.

Baste decir a manera de síntesis, que las Fuerzas Armadas tradicionales chilenas, eran más leales a los valores que brotan y expresan el orden social imperante, que a su juramento de respeto al ordenamiento constitucional. Y en el momento que percibieron a la política del gobierno como atentatoria a lo que ellos entendían por patria, soberanía, libertad, democracia, seguridad nacional, no vacilaron en escoger la opción contrarrevolucionaria promoviendo el golpe militar para salvaguardar lo que para ellos eran los únicos fundamentos legítimos del orden social.

La presunta prescindencia política y el carácter profesional de los militares chilenos resultaron ser pues, un mito y lo real fue lo que está escrito en las obras de los clásicos: las ins-

tituciones militares de un sistema político son sus garantes armados mediados por la lealtad hacia los valores en que se expresa el orden social administrado por ese sistema político.

Hay que devolverle la soberanía al pueblo

Si hemos querido aprovechar esta ocasión para acentuar tres elementos de la vulnerabilidad del régimen de la Unidad Popular, es porque cada uno de ellos apunta a una dimensión de la vida política, que hoy tiene una palpitante actualidad, sobre todo en este momento, en que la dictadura militar chilena, cada vez más debilitada y aislada, pero con fuerzas todavía para sobrevivir, entra en el período de su colapso final, preocupada sólo de administrar la crisis originada por el fracaso de su proyecto contrarrevolucionario.

El que este colapso se produzca cuanto antes, depende en primer lugar, de que aprendiendo de nuestra propia experiencia, sepamos ahora hacer lo que no hicimos en 1970: unir a todas las fuerzas auténticamente democráticas no sólo en la acción común contra la dictadura, hecho que en la práctica se produjo en lo fundamental ya en 1983, cuando el pueblo unido y en la calle recuperó su papel protagónico fundamental en el escenario del país, sino en su proyección política, conformándose un Gran Acuerdo Democrático Nacional capaz de poner en evidencia la correlación de fuerzas favorable al pueblo y a la democracia, de incentivar y estimular el ascendente movimiento opositor de masas, que necesita saberse conducido por una dirección coherente, unitaria y pluralista para alcanzar superiores niveles de amplitud, fortaleza y combatividad. Ello permite a la vez ofrecer al pueblo una alternativa realista y viable al régimen militar, que lo motive en la brega y que disipe la imagen de vacío político, de división y de impotencia en el campo opositor, que la dictadura se empeña en difundir en la opinión pública, a pretexto de la incapacidad mostrada hasta ahora por las directivas políticas opositoras de vencer sectorismos partidistas, prejuicios ideológicos y colocarse a la altura de las circunstancias respondiendo al reclamo nacional por la unidad y la lucha. Sólo la unidad pluralista de las fuerzas democráticas, sin exclusiones, abre el camino a la victoria y puede precipitar a breve plazo el derrumbe del régimen militar. Esto significa romper ahora, la disposición tripartita del espectro político chileno que de nuevo se insinúa y tiende a persisitir, hecho que como se deja señalado en esta exposición, fue causa determinante de la fragilidad del triunfo popular de 1970 y luego del gobierno mismo que de allí emergió. Se trata pues, de romper esta disposición perversa, uniendo a las fuerzas de izquierda con las de centro y hasta con las de derecha que sean consecuentemente democráticas y anti dictatoriales, bajo la sola condición de ser intransigentes en el desconocimiento de la legitimidad del régimen. Y ello porque su desconocimiento es la única garantía para que el abandono del dictador del poder, no vaya a ser sólo un cambio de fachada y el régimen contrarrevolucionario se mantenga bajo otras apariencias, sino que implique de veras el derrumbe de ese régimen y pueda devolverse de inmediato, integralmente al pueblo, la soberanía que le ha sido expropiada, a fin de que éste pueda hacerse nuevamente dueño de su propio destino.

Frente al desplome de la dictadura

El objetivo central de la dictadura, una vez producido el desplome de su modelo económico neo-liberal, ha sido el mantener dividida a la oposición para facilitar la administración de su crisis y permanecer en el poder. Ha introducido para ello, desgraciadamente con relativo éxito, elementos divisionistas en el campo opositor, ofreciendo diálogo y aparentando tender la mano a quienes se definan como anticomunistas y antimarxistas y renuncien al uso de todas las formas de lucha idóneas para combatirlo, con el propósito manifiesto de ganar tiempo y de dificultar la unidad antidictatorial. Felizmente se está logrando superar estos obstáculos al consenso opositor, y cada vez está más claro para todos, que sólo unidas en la acción y en la lucha, las fuerzas democráticas lograrán tumbar a la tambaleante dictadura.

El acuerdo opositor, por otra parte, alrededor de la vuelta sin condiciones ni posturas excluyentes a la democracia plena, no es sólo pre requisito para ganar fuerzas para derribar al régimen, sino también exigencia para la consolidación de la democracia durante la transición, para evitar así fracturas que la debiliten y creen condiciones para nuevas aventuras

contrarrevolucionarias.

La unidad democrática no es óbice para el desarrollo en su seno de la fuerza propia de las tendencias y partidos democrático-revolucionarios y de orientación socialista. Por el contrario, la convergencia y el concierto entre estos componentes fundamentales del movimiento popular facilita el acercamiento hacia ellos de los sectores democráticos de centro, al hacer de la izquierda unida un núcleo de atracción hacia las capas medias cuyos intereses objetivos no difieren, sino se confunden con los de la clase obrera y el pueblo en general.

Por eso, aprovechando la experiencia de la Unidad Popular, es preciso ahora también que la izquierda tome la ofensiva en el terreno ideológico y se esfuerce por hacer claridad entre esas capas medias acerca de que sus objetivos e intereses son complementarios con los del resto del pueblo chileno y se ven interpretados en la salida democrático-revolucionaria que la izquierda propone a la crisis del régimen. No es posible ahora incurrir en el mismo error de hace 15 años y permitir que la reacción se gane las conciencias de esos vastos sectores sociales medios, para servir propósitos que no son los suyos y los perjudican notoriamente como lo demuestran hasta la saciedad los resultados de la política desarrollada por la dictadura militar. La garantía de que los legítimos intereses de esos sectores medios serán respetados y promovidos pasa a ser elemento fundamental para hacer duradera y estable la alianza de la clase obrera con la pequeña y mediana burguesía y la intelectualidad, permitiendo así la consolidación y la profundización de la democracia apoyada por las grandes mayorías nacionales.

Hacia la integración y el desarrollo latinoamericano

Por último, las enseñanzas que entrega la experiencia de la Unidad Popular, resultado de sus carencias en materia de política militar, deben llevar a las fuerzas democráticas a colocar durante la transición y con mayor fuerza aún después de rescatada plenamente la democracia, el tema de las Fuerzas Armadas —el de su naturaleza, su ideología y valores, su rol en la sociedad—, en primer lugar entre las cuestiones que tienen que ser amplia y profundamente debatidas y discutidas por la comunidad nacional, de manera que la democracia del mañana no se establezca a título precario, sujeta a la tutela de hecho de unas instituciones castrenses dotadas de poder de veto para impedir las transformaciones sociales, a través de la tácita y permanente amenaza de la intervención militar en el momento en que ellas perciban cuestionado lo que entienden por el supremo interés nacional, a la luz de su doctrina militar reaccionaria.

El problema militar en la futura democracia, no se resuelve con el simple enclaustramiento de los soldados en los cuarteles y su retorno a sus labores profesionales. La tarea de hacer un diseño de la transformación de las instituciones militares, permear a la sociedad toda la necesidad de emprenderla y llevarla a la práctica con flexibilidad y firmeza, no es faena fácil, pero es requisito y precondición fundamental para construir no sólo en Chile, sino en la mayor parte de América Latina, una sociedad más justa, más democrática y más avanzada.

Una última reflexión acerca de un tópico que interesa como el que más al Chile de mañana y no sólo a nuestro país, sino a toda la América Latina. Un tema que ha sido colocado en los últimos años por los hechos en el orden del día del quehacer de todos los pueblos del subcontinente.

Se trata de la crisis en que han entrado los estados nacionales latinoamericanos, tal como se constituyeron en el siglo pasado, fraccionando a nuestra región en más de una veintena de estados de desigual poderío, pero ninguno capaz de responder con su propia fuerza a los grandes desafíos a que se ven enfrentados nuestros pueblos en el día de hoy. Desafíos que emergen en lo fundamental, de la crisis del actual injusto orden económico internacional, que se manifiestan en el insoluble problema de la deuda externa, y que sólo pueden ser abordados racional y justicieramente sin agravar la miseria de nuestros pueblos, desde una perspectiva latinoamericana de conjunto, haciendo pesar la fuerza que da la unidad ligada a la democracia, hacia la que vamos avanzando entrelazados todos los pueblos a lo largo y a lo ancho del amplio mundo de América Latina y el Caribe. Con dificultades y tropiezos, por complejas y tortuosas sendas, pero que conducen todas finalmente a la integración y al desarrollo latinoamericano, que es el complemento y la otra cara de la democracia y de la justicia para nuestros pueblos.

Una mirada al Chile de hoy con perspectiva de futuro, no puede menos que elevarse hasta poder contemplarlo desde esas alturas, las de la patria grande latinoamericana. Máxime si ello se hace en esta oportunidad en que recordamos la victoria cívica de Salvador Allende, cuyo paso por la Presidencia de Chile, significó como nunca en nuestra historia un premonitor empeño por enlazarnos cada vez más estrechamente con cada una de las patrias que integran esta inmensa y promisoria región del mundo, preñada de grandeza y de porvenir, que es la América Latina y el Caribe. ◇